

El 27 de junio del pasado año, el titular del Juzgado Federal N° 4 dictó el procesamiento del ex Ministro de Salud, Dr. Alvaro Coleffi, como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo (arts. 265 y 256 del Código Penal), por sucesos acaecidos al tiempo en que desempeñó el cargo de Ministro de Salud.

En el mismo pronunciamiento también se sujetó a proceso al Sr. Nicolás Biondo, a ese tiempo dueño de la empresa Farmacia y Laboratorio Biondo, y a su yerno, el Sr. Guillermo Reinwick, esta vez exclusivamente en orden al delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal), en calidad de autor y partícipe, respectivamente.

Nicolás Biondo, solicitó la nulidad del auto de procesamiento por estar fundado en prueba nula y requirió se dicte su sobreseimiento.

El primero de los planteos de nulidad nos remonta a las declaraciones testimoniales prestadas por Silvia, Graciela y Olga Biondo. Si bien la crítica fue escoltada por otras partes del sumario, fue la defensa de Nicolás Biondo la que abrió el debate al destacar que aquellos testimonios fueron recabados en violación a las prescripciones contenidas en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal de la Nación.

En la medida en que a las dos primeras -sobrinas del nombrado- no se les advirtió sobre la posibilidad de abstenerse de declarar en perjuicio de su tío, y a la última -su hija- no se le impuso acerca de la prohibición de hacerlo en contra de su padre, todas las testimoniales recibidas resultarían, a su criterio, inválidas.

Paralelamente, la defensa de Nicolás Biondo argumentó que se lo había privado del derecho de asistir a esos actos, con la correspondiente vulneración de su derecho de defensa en juicio.

De igual modo, no resulta atendible el planteo de nulidad introducido por la defensa de Nicolás Biondo en función de "haber sido privado del derecho de asistir a las declaraciones testimoniales" evaluadas.

A continuación, aunque aludiendo a otras razones, Nicolás Biondo también planteó la nulidad de su propia declaración testimonial. La defensa del nombrado sostuvo que su testimonio - prestado el día 5 de diciembre de 2013- era nulo en tanto el juez, valiéndose del juramento de decir verdad al que debió ser sometido, obtuvo las declaraciones que necesitaba, obligándolo a "autoincriminarse". En consecuencia, adujo que fueron esas expresiones las que, sin mayor basamento, sirvieron para convocarlo en declaración indagatoria la que, por tanto, también resulta nula. Expresó a su vez que, por todo ello, en ocasión de brindar esta última declaración se vio en el



Adriana L. Gigola de Haur  
SECRETARIA  
Comisión de Seguimiento al Poder Judicial y Escuela Judicial  
Secretaría de la Administración del Poder Judicial de la Nación

desplegado. Ninguna advertencia o exhortación cabía hacer a los testigos cuando Nicolás Biondo carecía del carácter al que aluden las normas. Incluso, no puede perderse de vista que las audiencias fueron celebradas -exceptuando aquella a la que asistió Silvia Noemí Biondo- de manera coetánea a que Nicolás Biondo revistiera en el proceso el rol de parte querellante, el cual conservó hasta el día 14 de marzo de 2014. Este aspecto es atacado por algunos de los apelantes al sostener que Nicolás Biondo resultaba parte imputada en el sumario desde mucho tiempo atrás.

Asimismo, esta afirmación, en su errático razonamiento, choca con aquella otra que pretende sostener que él era imputado al tiempo en que su hija y sobrinas declararon por cuanto así lo estimó el fiscal de la causa, olvidando que si bien asiste a este órgano la función acusatoria, es al juez a quien el actual ordenamiento adjetivo encomienda la dirección del proceso.

Finalmente, el pretender sostener la existencia de un perjuicio por el contenido mismo de las declaraciones es un argumento que ninguna perspectiva de éxito puede albergar, por cuanto la legalidad o ilegalidad de una medida no depende de su rendimiento, sino de su sujeción u oposición a las reglas. Un criterio semejante importaría restar todo valor a cualquier prueba que, en el marco de un proceso penal, perjudique la situación del imputado, lo cual significa toda renuncia al efectivo ejercicio del poder coactivo del Estado que a través de aquél se realiza. En definitiva, ninguna de las razones esgrimidas por las defensas es capaz de socavar las conclusiones a las que se ha arribado. Y estas tampoco se ven turbadas frente a la imputación que más adelante se formuló contra Nicolás Biondo, en la medida en que los testimonios referidos - formalmente válidos- no sean ponderados en su contra. Esto último implica, además de la observancia de las normas aplicables al conflicto, la imposibilidad de que en lo sucesivo se materialice un perjuicio que sí atente contra los valores y los principios -legalmente tutelados- citados más arriba.

De igual modo, no resulta atendible el planteo de nulidad introducido por la defensa de Nicolás Biondo en función de "haber sido privado del derecho de asistir a las declaraciones testimoniales" evaluadas, pues la prerrogativa demandada nació recién al formalizarse la imputación en su contra, la cual, insistimos, fue posterior a la fecha en la que se celebraron las audiencias que se pretenden desautorizar. No se advierte, por lo demás, que en la ocasión oportuna la parte haya requerido presenciar dichos actos -en virtud del rol que a ese tiempo detentaba-, y cuyo rechazo fundase la idea de un perjuicio que el señor juez deba reparar.

Respecto de la nulidad planteada por Biondo y su defensa en cuanto a sus propias declaraciones, sostiene la fiscalía que cabe destacar que al brindar estas segundas manifestaciones el imputado fue expresamente relevado de la



Adriana L. Gigena de Haar  
SECRETARIA  
Comisión de Selección de Magistrados y Funcionarios  
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

obligación de decir verdad, lo que supone un doble orden de consecuencias. Por un lado, incide sobre el valor asignado a su anterior testimonio. Este, más allá de su incorporación a las actuaciones, carece de toda gravitación como prueba de cargo frente a una flamante situación en la que sólo las expresiones canalizadas vía el acto reglado por los art. 294 y ss. del C.P.P.N. podrán ser atendidas.

Incluso, para mayor perplejidad la defensa del recurrente también tachó de nulo el auto de procesamiento porque "no se evacuaron las citas propuestas en su descargo" el cual, recuérdese, estaba exclusivamente conformado por la versión de los hechos exteriorizada en su audiencia testimonial, de acuerdo con la requisitoria antes referida. Esto quiere decir que, por un lado, el impugnante estimó que -en definitiva- el contenido de su declaración indagatoria "no podía tenerse en cuenta a la hora de resolver su situación procesal"; mientras que, por el otro, sostuvo que el auto de procesamiento era nulo -justamente- porque no se ponderó el contenido de su descargo -que no era otro que el de su audiencia testimonial.

El Fiscal postuló el rechazo en la convicción de que el decisorio atacado estaba dotado con la fundamentación que reclama el artículo 123 del Código adjetivo.

**RESUELVA LA PRETENSIÓN DE LA DEFENSA EN FORMA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.**

La Sra. Mirta García inicia acción de amparo con medida cautelar innovativa contra la Anses, en marzo del corriente año 2014, a fin de reclamarle a la misma, el pago de la asignación familiar por hijo, reglada por la ley 24.714, a favor de sus hijos menores Jorge Oscar Lopez (discapacitado con certificado de discapacidad adjunto, nacido el 10/2/90); Marina Belen López (4/10/95) y Mauro Belen López (1/9/97); sin importar que la empleadora del padre de los menores no se encuentre registrada al Sistema Único de Afiliaciones Familiares creado por el Dec. 641/03. La actora señala que si bien las asignaciones en cuestión le fueron asignadas con carácter provisorio, las mismas deben ser vueltas a abonar y adquirir carácter definitivo, en particular la referente a su hijo discapacitado. En tal sentido, a través de la acción de amparo intentada, se resalta que el objeto de la misma es la regularización del pago de la asignación percibida en su condición de madre, en representación de sus hijos, desvinculando el pago de las prestaciones de si la institución empleadora de su marido se encuentre suscripta al Sistema Único de Afiliaciones Familiares, sin poder hacerse restricción alguna en lo que hace al pago en base a dicho motivo y a posteriori del derecho otorgado; máxime y en atención a que el organismo previsional dejó de abonar las asignaciones familiares percibidas, al advertir que la empleadora de su marido se dio de baja como empleadora ante la AFIP y por ende dejó de pertenecer al SUA.

En lo que hace la medida cautelar innovativa, la misma se orienta a restablecer el inmediato pago de la asignación familiar por hijo para cada uno de los menores, mientras se tramita la acción de amparo, acreditando como verosimilitud del derecho reclamado doctrina y jurisprudencia que habla sobre los derechos del niño; en lo que hace a la existencia del peligro en la demora, denuncia una precaria situación económica, asegurando la imposibilidad de obtener la cautela por otros medios. Ofrece como contracautela, caución juratoria.

Resuelva la medida cautelar, así como la procedencia formal de la acción de amparo intentada.

Adriana L. Gigena de Haar  
SECRETARIA  
Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial  
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación